

Señor
JUEZ DEL CIRCUITO (REPARTO)
E.S.D.

Referencia:	ACCIÓN DE TUTELA
Accionante:	JUAN CARLOS ECHAVARRIA ROMERO CC 80732829
Accionados:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y la DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL (DISAN)
Derechos vulnerados:	DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ACCESO A CARGO PÚBLICO

YO JUAN CARLOS ECHAVARRIA ROMERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.80732829, actuando en nombre propio, ante usted de manera respetuosa presento acción de tutela, derecho amparado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglado por el decreto 2591 de 1991, a fin de que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al acceso a cargo público, derechos adquiridos afectados por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y la DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, de conformidad con los siguientes:

HECHOS

Primero: La Comisión Nacional del Servicio Civil expide Acuerdo No. 20181000009066 de 19 de diciembre de 2018, por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de mérito para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la DIRECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, “Proceso de selección No. 631 de 2018 – Sector Defensa”

Segundo: Realicé inscripción, en el proceso de convocatoria “Proceso de selección No. 632 de 2018 – Sector Defensa”, en el empleo (SECTOR DEFENSA **OPEC 84875** AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, Código 6-1, Grado 28 PROCESO DE SELECCIÓN NO. **631** DE 2018 – DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL)

Tercero: Una vez surtidas las etapas del referenciado proceso de selección, superadas las validaciones y pruebas del mismo, fue conformada la lista de elegibles de la **OPEC 84875** mediante **RESOLUCIÓN No 12495 de 23 de Noviembre de 2021** la cual cobró firmeza individual el día **7 de Diciembre** lista en la que me encuentro ocupando el puesto **No.1** de 1 cargos disponibles.

Cuarto: el Capítulo VI del Acuerdo No. 20181000009066 de 19 de diciembre de 2018, artículos 59 al 63, establece la realización de un “estudio de seguridad” como requisito previo a la expedición del acto administrativo de nombramiento y la competencia del nominador para la realización del mismo. **El día 12 de enero de 2022, me fue solicitada información por parte DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA**

NACIONAL – DINCO Transversal 33 No. 47A -35 Sur (Barrio Fátima), para efectos de realizar estudio de seguridad, documentos que fueron entregados personalmente al Intendente al día siguiente de recibir la comunicación. 13 de enero de 2022

Quinto: El Acuerdo No. 20181000009066 de 19 de diciembre de 2018 no establece el **tiempo requerido** para la realización de Estudio de Seguridad, como tampoco lo señala expresamente el Art 27 del DECRETO LEY 91 DE 2007 que regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa; solo hasta el **28 de marzo** del presente año me fue notificado el resultado del estudio de seguridad mediante notificación No. GS-2022-018093-DISAN de parte de SUSAN-GUTAH vía Email personal de concepto **FAVORABLE**

Sexto: Cabe mencionar que a la entidad nominadora el día 4 de abril se entregó toda la documentación correspondiente exigida en el comunicado GS-2022-018093-DISAN, del día 28 de marzo de 2022 y el día **El día 6 de mayo de 2022 me fueron realizados los exámenes médicos ocupacionales de ingreso en la IPS CENDIATRA de la ciudad de Bogotá.**

Séptimo: Las reglas que rigen el proceso de selección “No. 632 de 2018 – Sector Defensa” desde el principio establecían que la DIRECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL debía efectuar en un término preciso los nombramientos de los concursantes que superaran las etapas clasificatorias. Al respecto **el art 70 del Acuerdo No. 20181000009066** de 19 de diciembre de 2018 establece que “Una vez publicados los actos administrativos que contienen las respectivas Listas de Elegibles debidamente ejecutoriados, superado el estudio de seguridad, celebrada la audiencia pública en los casos en los que sea necesario, el Representante Legal o quien haga sus veces tendrá **diez (10) días hábiles para producir el acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba**, que tendrá una duración de seis (6) meses.”. **En mi caso particular, como quiera que no hay en la OPEC 84875 audiencia para escoger plaza, ese plazo venció el pasado 07 de abril de 2022** Cumpliendo así en el momento de redactar este escrito de tutela 34 días Hábiles en los cuales se a violado el acuerdo.

Octavo: El día 18/04/2022 envié un derecho de petición a la Comisión Nacional del servicio civil CNSC bajo radicado **2022RE064423** y código de verificación **1417977** el cual a la fecha de redacción de este documento no ha sido respondido. También se envió a LA dirección de sanidad de la policía Nacional pero no me llegó radicado y de igual forma no ha sido respondido.

Noveno: **Mi último empleo lo tuve hasta agosto de 2021 y la lista de elegibles quedo en firme el 7 de diciembre de 2021**; por tanto, esta situación de dilatación injustificada por parte de la accionada en la realización de los actos administrativos de nombramiento en periodo de prueba me genera un perjuicio irremediable, ya que llevo 9 meses sin un empleo formal y ya no puedo con mis gastos de diario vivir, me encuentro en situación donde no tengo un mínimo vital y es mi deber salvaguardar mi derecho al trabajo y al mérito. Eso teniendo en cuenta

que los provisionales que ganaron concurso ya fueron nombrados y posesionados hace varios meses vulnerando también mi derecho a la igualdad y oportunidad laboral.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con la expedición de la Constitución de 1991 se instituyó en nuestro ordenamiento la Acción de Tutela como herramienta idónea que faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de los Derechos Constitucionales Fundamentales, si estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o inclusive respecto de particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que proponga el demandante.

Ahora bien, para el caso de las tutelas interpuestas en el trámite de los concursos de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, la Corte Constitucional ha sostenido¹ que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la convocatoria. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de los concursantes.

Respecto de los concursos de mérito, la Corte Constitucional ha señalado que "son una herramienta estatal que permite, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, medir las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quién mejor pueda desempeñarlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.

Lo anterior significa que tales medios de selección deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administración; de conferir vigencia a los de buena fe y confianza legítima; y de garantizar los derechos de igualdad y acceso a cargos públicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias constituyen una violación tanto a los principios arriba señalados como al derecho fundamental al debido proceso²

¹ Sentencia de AC-006982

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de tutela de 10 de agosto de 2018, Rad. No. 11001-22-03-000-2018-01217-01

Sobre el particular ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia T - 843 de 2009, que "la entidad estatal que convoca a un concurso abierto con la finalidad de escoger personal para suplir cargo de sus plantas debe respetar las reglas que ella misma ha diseñado y a las cuáles deben someterse los participantes".

También se ha dicho que, en el desarrollo de un concurso de méritos, "el debido proceso a que tienen derecho [los participantes] es el que quedó señalado en la convocatoria"³ y que "cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos"⁴.

Así pues, las reglas que rigen el proceso de selección "No. 632 de 2018 – Sector Defensa" desde el principio establecían que la DIRECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL debía efectuar en un término preciso los nombramientos de los concursantes que superaran las etapas clasificatorias. **Al respecto el art 70 del Acuerdo No. 20181000009066 de 19 de diciembre de 2018 establece que "Una vez publicados los actos administrativos que contienen las respectivas Listas de Elegibles debidamente ejecutoriados, superado el estudio de seguridad, celebrada la audiencia pública en los casos en los que sea necesario, el Representante Legal o quien haga sus veces tendrá diez (10) días hábiles para producir el acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba, que tendrá una duración de seis (6) meses."**.

JURAMENTO

Conforme lo establece el inciso SEGUNDO del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos sobre los que versan la presente.

PETICIONES

1. Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al acceso a los cargos públicos.
2. En consecuencia, se ordene al Representante Legal de la DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL o a quien haga sus veces que de manera inmediata adelante todas las actuaciones administrativas necesarias para formalizar y materializar el acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba en el empleo denominado **OPEC 84875 AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA**, Código 6-1, Grado 28 PROCESO DE SELECCIÓN NO. 631 DE 2018 – DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL, en el cual me encuentro ocupando la posición No. # 1 de # 1 cargos disponibles, de la lista de elegibles conformada para el empleo.

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de tutela de 19 de noviembre de 2015, Rad. No. 11001- 22-03-000-2015-02490-01.

⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-588 de 2009

ANEXOS

1. Acuerdo No. 20181000009066 de 19 de diciembre de 2018 de la CNSC.
2. Resolución № 12495 de 23 noviembre 2021 de la CNSC.
3. Resultado estudio de seguridad GS-2022-018093-DISAN
4. Derecho de petición N# de radicado **2022RE064423 a la CNSC Y DISAN**
5. Copia de cédula de ciudadanía.

NOTIFICACIONES

El suscrito recibe notificaciones al correo electrónico juank.sistemas@hotmail.com celular 3014401173, y en la dirección Cra 72M 38-20 Sur, Bogotá- Cundinamarca

La accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC en la Carrera 12 No 97-80 ,Bogotá atencionalciudadano@cns.gov.co y la DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL Carrera 59 26-21 CAN -- Bogotá D.C., disan.gutah-asj@policia.gov.co Bogotá

Cordialmente,

Juan Carlos Echavarría Romero
80 732. 829

JUAN CARLOS ECHAVARRIA ROMERO

80732829

Cel 3014401173

Juank.sistemas@hotmail.com